



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, once (11) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

22-053

Proceso: ORDINARIO LABORAL- Apelación.
Demandante: **GUILLERMO ALBERTO SERRANO PINEDA**
Demandado: **COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A.**
Radicado No.: 05001-31-05-014-2021-00216-01.
Tema: **INEFICACIA TRASLADO**
Decisión: **CONFIRMA Y MODIFICA SENTENCIA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones E.I.C.E., Protección S.A. y Porvenir S.A. contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 040** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Solicita el demandante, que tras la declaratoria de **INEFICACIA** del traslado a las administradoras del RAIS, se tenga como válidamente afiliado al régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad, ordenándose a Porvenir S.A. y a Protección S.A. trasladar a Colpensiones todos y cada uno de los aportes incluyendo los rendimientos que reposen en su cuenta de ahorro individual, los bonos pensionales, frutos e intereses, comisiones, gastos de administración y recursos destinados al pago de los seguros previsionales. Consecuencialmente solicita que se ordene a esta última entidad recibir dichas sumas, validar los aportes e incorporarlos a la historia laboral. Finalmente solicitó se condene en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que nació el 08 de enero de 1962.
- ✓ Que inicialmente se afilió al RPM administrado por el ISS, hasta el 13 de enero de 1997, fecha en la cual se trasladó al RAIS administrado por Porvenir S.A.
- ✓ Que el 03 de diciembre de 1997, efectuó movilidad a Protección S.A.
- ✓ Que al momento de afiliarse, ninguna de las AFP le realizó un estudio previo, individual y concreto sobre las ventajas y desventajas que le aparejaría permanecer o trasladarse de régimen pensional, además no se le explicaron las diferencias entre ambos regímenes, no le hablaron del derecho de retracto, ni le indicaron las principales características RAIS.
- ✓ Que no recibió re-asesoría antes de cumplir los 52 años.
- ✓ Que la mesada pensional en el RAIS es inferior a la que le correspondería en el RPM.
- ✓ Que solicitó ante Colpensiones la aceptación de su traslado de régimen pensional, mismo que fue negado mediante comunicación 20214786807 del 27 de abril de 2021.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Protección S.A. se opuso a las pretensiones incoadas; y frente a los hechos aceptó los relativos a la fecha de nacimiento del actor, la fecha de afiliación a dicha AFP y el número de semanas cotizadas. De otro lado negó el incumplimiento del deber de información al señalar que brindó una explicación completa y adecuada sobre el RAIS bajo los principios de legalidad y buena fe, poniendo de presente los efectos y consecuencias del traslado, sin que pueda hablarse que un régimen es más favorable que otro, pues esto depende de cada caso en particular. Agregó que sus asesores siempre realizan un estudio previo y particular sobre el caso concreto de cada potencial afiliado y su situación jurídica.

Colpensiones E.I.C.E. se opuso a las pretensiones de la demanda; y frente a los hechos, aceptó los relativos a la fecha de nacimiento del actor, la afiliación al Régimen de prima media, el traslado a Porvenir, la solicitud traslado de régimen pensional ante Colpensiones y la negativa a esta solicitud. Sobre los demás indicó que no le constan al ser situaciones exógenas al conocimiento de la entidad.

Finalmente, Porvenir S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda; y no aceptó los hechos del libelo demandatorio. Frente al traslado de régimen, adujo que se dio en cumplimiento de las obligaciones vigentes para la fecha, efectuándose además la debida asesoría. Resaltó que la obligación de otorgar información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de la afiliación nace en el ordenamiento jurídico únicamente a partir de la entrada en vigor del Decreto

2241 de 2010. Aclara que mediante el comité que dirime los conflictos de múltiple vinculación, se definió que la afiliación del demandante al sistema de seguridad social se hizo en cabeza de Porvenir S.A, razón por la cual, el certificado de sistema de Información de los Afiliados a los Fondos de Pensión (SIAFP), indica que la vinculación inicial fue en el Régimen de ahorro individual con solidaridad (R.A.I.S) desde el 13 enero de 1997 con fecha de efectividad el 14 enero de 1997.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 02 de marzo de 2022, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR la ineficacia de la afiliación del señor GUILLERMO ALBERTO SERRANO PINEDA, identificado con C.C. 71.615.896 al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., igual que su posterior traslado entre administradoras del régimen de ahorro individual concretamente hacia a la AFP PROTECCIÓN S.A.

SEGUNDO: CONDENAR a PORVENIR S.A. a trasladar con destino a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, el valor de los dineros correspondientes a los gastos de administración, para la época en que estuvo afiliado el señor Guillermo Alberto Serrano Pineda, que comprenden lo pagado por seguro previsional y la garantía de la pensión mínima, entre el 14 de enero de 1997 y 31 de enero de 1998.

TERCERO: CONDENAR a PROTECCIÓN S.A. a trasladar con destino a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de ésta providencia, el valor de los dineros hallados en la cuenta de ahorro individual del señor GUILLERMO ALBERTO SERRANO PINEDA, incluyendo para el efecto los rendimientos financieros y las comisiones de administración, que incluyen lo pagado por seguro previsional y la pensión mínima, a partir del 01 de febrero de 1998.

CUARTO: ORDENAR a COLPENSIONES, a que reactive la afiliación del señor SERRANO PINEDA al régimen de prima medida con prestación definida, sin solución de continuidad.

QUINTO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROTECCIÓN S.A., que comunique, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, el contenido de la decisión a la NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICINA DE BONOS PENSIONALES, para los efectos legales correspondientes.

SEXTO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito propuestas

SEPTIMO: COSTAS del proceso a cargo de PROTECCION S.A. y PORVENIR S.A., a favor de la demandante, para cuya liquidación incluye la suma de \$1.000.000, a cargo de cada una por concepto de agencias en derecho.”

Dentro del término concedido por la ley, Colpensiones E.I.C.E., Porvenir S.A. y Protección S.A. interpusieron y sustentaron recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de las administradoras del RAIS, en quién recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral.

2.2. RECURSOS DE APELACIÓN

2.2.1. PRESENTADO POR PORVENIR S.A.

Adujo que para la fecha de vinculación del actor (1997), no existía la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y los preceptos normativos vigentes no eran tan específicos sobre la forma en cómo se debía brindar la información. Por ello, Porvenir brindó una información de manera verbal con base en la cual el demandante firmó de manera libre, voluntaria e informada el formulario de afiliación considerando que tenía unas mejores prerrogativas y que era mejor para su situación pensional, pues deseaba tener una pensión anticipada o la posibilidad de tener una mejor mesada pensional con respecto al ISS. Frente a la circunstancia de extinción del ISS, manifestó que era un hecho notorio para la fecha de ocurrencia de los hechos y por ende, Porvenir no incurrió en ninguna falta frente a ello.

Resaltó que, en la providencia no se abordaron los argumentos presentados frente al Comité de Multivinculación decretado ante Porvenir y Colpensiones el cual declaró como inválida la afiliación al ISS. Entonces, si un acto no surge a la vida jurídica en virtud de una prerrogativa normativa como lo es el Decreto 3995 de 2008, y lo que se pretende es una ineficacia del traslado, retrotrayendo las cosas al estado inicial, no se puede retrotraer a una vinculación que nunca existió como lo es la vinculación al ISS. La Sentencia SL 4211 de 2021 afirma que no se puede declarar la ineficacia de la afiliación al RAIS para retrotraer al estado de la nada del actor y por ende, no se podría hablar de traslado.

En caso de que el tribunal considere que se debe dejar en firme la ineficacia, solicita que Porvenir no sea condenada a trasladar los rubros ordenados en sentencia de primera instancia, específicamente lo atinente a los del artículo 20 de la Ley 100 de 1993.

2.2.2. PRESENTADO POR PROTECCIÓN S.A.

Solicitó que se revoque la condena tendiente al traslado de las comisiones de administración y primas de seguro previsional, teniendo en cuenta que estos son descuentos autorizados y establecidos en la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003, la cual faculta y autoriza a las AFP para realizar el descuento del 3% sobre el 16% de los aportes a seguridad social en pensiones de los afiliados. El descuento del 3% se usa para financiar los gastos de administración y para pagar la prima del seguro previsional el cual opera en ambos regímenes pensionales. Obra como prueba en el expediente el certificado de rendimientos de la cuenta de ahorro individual del demandante donde se demuestra que sus aportes tuvieron una ganancia, lo que da cuenta de que los mismos fueron debidamente administrados por esta entidad.

Frente a la orden de devolver los dineros de la cuenta de ahorro individual del demandante más los rendimientos financieros y adicionalmente lo descontado por comisiones de administración, se estaría constituyendo un enriquecimiento sin justa causa a favor de Colpensiones por recibir una comisión que ni siquiera es destinada a financiar la pensión de vejez del actor. Adicionalmente, ya se estarían trasladando los rendimientos de la cuenta que son fruto de la buena administración realizada por Protección, por lo que esta AFP tienen derecho a conservar esta comisión como restitución mutua a su favor y no hay razón para trasladarla a Colpensiones.

Asimismo, el Decreto 2555 de 2010 señala que el manejo de los recursos administrados por las AFP es vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, por lo que es preciso poner de presente que esta entidad en Concepto del 17 de enero del 2020 indicó que cuando se declara judicialmente la nulidad o ineficacia de la afiliación, debe darse aplicación al artículo 7 del Decreto 3995 de 2008, el cual indica que el traslado debe respetar los dineros que corresponden a la comisión de administración. Sobre la prima del seguro previsional, menciona que esta ya fue girada a una aseguradora para que en caso de existir un siniestro de sobrevivencia o invalidez dicha compañía pague una suma adicional con el fin de financiar las pensiones por dichos conceptos. Es por ello que Protección está imposibilitada para solicitar la devolución de estos dineros, pues la aseguradora es un tercero de buena fe. Finalmente, señaló que frente a estos conceptos opera el fenómeno de la prescripción toda vez que son conceptos que se descuentan periódicamente y que no financian directamente la prestación económica por vejez. Lo anterior con fundamento en el artículo 488 del CST en armonía con el artículo 151 del CPTSS.

2.2.3. PRESENTADO POR COLPENSIONES E.I.C.E.

Argumenta que si bien en el fallo de primera instancia se ordenó el traslado de los conceptos que componen la cuenta de ahorro individual del demandante, esta no se hizo de manera indexada. Lo anterior teniendo en cuenta que las cuotas de administración que cobran las AFP del RAIS son un ingreso propio a favor de la generación de un patrimonio, todo esto en virtud de la afiliación de un cotizante obligatorio al sistema general de pensiones, que de encontrarse que estas mismas se declaren ineficaces, estos dineros conjuntamente con todos sus rendimientos generan un enriquecimiento sin justa causa a su favor y que al no ser trasladados de forma indexada constituyen un desmedro para Colpensiones, pues esta entidad nunca tuvo en su haber la destinación o administración de estas sumas de dinero las cuales servirían para efectos de capitalizar el fondo de naturaleza común.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

2.3.1. PRESENTADOS PORVENIR S.A.

En primer lugar, resaltó que no existían razones fácticas y jurídicas para declarar la ineficacia del traslado, pues la decisión se tomó de forma espontánea y sin presiones, cumpliendo los requisitos exigidos por la normatividad vigente (artículo 97 del Decreto 663 de 1993), y después de brindar la información necesaria, y obligatoria para la época. Destacó que el accionante no cumplió su deber de diligencia y cuidado en sus propios negocios, lo cual conlleva a que la misma no pueda ser beneficiaria de su propia culpa o negligencia en su actuar, más aún, cuando contó con varias oportunidades para trasladarse nuevamente de régimen y no lo hizo, ratificando su interés en mantenerse vinculada al RAIS.

Adujo que la motivación de la parte actora para retornar al RPM, es el carácter económico de la mesada pensional, mismo que no podía ser determinado en el momento en el que se presentó su vinculación, al depender de muchas variables que no eran conocidas en su momento, razón por la cual, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinó que la sola circunstancia de no cumplirse las expectativas pensionales no puede predicarse como un engaño.

Destacó que la prueba documental que extraña la juez de primera instancia en su fallo, frente a aquellos documentos que acrediten la entrega de información, no era una obligación vigente para el momento del traslado de la parte actora, pues esta obligación surgió con la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia financiera de Colombia, aunado a que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación surgieron a partir del año 2010 y 2014, por lo que no es cierto que la AFP se encuentra en una mejor posición probatoria que acredite lo solicitado, y mucho menos debe exigirse su aplicación de manera retroactiva.

En caso de confirmarse la decisión de primera instancia, solicitó que no se condene al traslado de los aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, gastos o cuotas de administración y sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora, considerando que los gastos de administración tienen por mandato legal una destinación específica que se encuentra en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, aunado a que estos descuentos han cumplido plenamente con su cometido y no se encuentran en el patrimonio de la AFP, pues se han destinado a cubrir los gastos en que se incurrió, para la generación de frutos o rendimientos que hoy se ven de manera positiva en la cuenta del accionante y para el cubrimiento de los riesgos de invalidez y muerte. Destacó que la orden de traslado constituye un enriquecimiento sin causa debido a la inaplicación de las normas legales que regulan las restituciones mutuas derivadas de una nulidad o ineficacia de un acto jurídico, además de transgredir el principio de sostenibilidad financiera. Aunado a lo anterior, destacó que no es procedente ordenar la indexación de las condenas, pues la pérdida adquisitiva de la moneda se resarciría con los rendimientos financieros generados.

Finalmente, con relación a las costas procesales, indicó que no es procedente por cuanto la entidad siempre obró con buena fe objetiva, y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para la época del traslado.

2.3.2. PRESENTADOS POR COLPENSIONES E.I.C.E.

Solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, considerando para ello que Colpensiones como entidad pública no tuvo incidencia en el traslado efectuado por el demandante, pues obedeció a la libre elección y ejercicio del derecho consagrado en el literal b) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, y por ser un tercero ajeno a ese negocio jurídico no puede verse ni beneficiado ni perjudicado por el error que se produjo entre las partes.

Desde esta perspectiva, adujo que el objetivo perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA.

De acuerdo con lo planteado en los recursos de alzada, se establecerá si es dable declarar la ineficacia de la afiliación del demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la cual se suscribió al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia. En caso afirmativo se determinará qué haberes le corresponde retornar a PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.

Así mismo, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de apelación, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

4. CONSIDERACIONES

A juicio de esta Magistratura, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de la afiliación, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su suscripción al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado.*** (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho;

y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado o afiliación original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de la afiliación al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.* (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia Corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

Etapas acumulativas	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia

ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA EL DEMANDANTE	Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta al actor afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por el demandante, se desprende, de un lado, que para la época de la afiliación inicial al RAIS, concretamente 13 de enero de 1997 cuando suscribió el formulario de vinculación a PORVENIR S.A. (fl 32 del archivo 04 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía a la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía el actor respecto del funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por la extinción del ISS, panorama bajo el cual, más que promocionarse el RAIS como una alternativa, era prácticamente una imposición ante el temor que fundaba tal aseveración, y por la ausencia de una asesoría integral en donde se le indiquen las características del régimen pensional, así como las ventajas, desventajas y consecuencias que aparejaría la afiliación.

Y es que expresamente el señor GUILLERMO ALBERTO SERRANO PINEDA en el aludido interrogatorio expuso que es profesional en geología y que se encuentra desempleado. Respecto del traslado a Porvenir adujo que en su lugar de trabajo recibió la visita de dos personas de la entidad quienes mediante una reunión no mayor a 5 minutos le manifestaron que el ISS se iba a acabar y que por ello le convenía estar en Porvenir, pues recibiría una mesada pensional más alta en una entidad con mayor solidez, argumentos que consideró suficientes para trasladarse de régimen. Destacó que no le hablaron de temas como aportes voluntarios, rentabilidad de aportes, y heredabilidad de aportes.

Respecto a la movilidad efectuada a Protección, manifestó que mediante una reunión individual no mayor a 5 minutos le indicaron los mismos argumentos respecto de Colpensiones con la diferencia que recibiría una mesada pensional superior a la que ofrecía Porvenir, ya que era un fondo más sólido y contaba con mejores respaldos financieros, razón por la cual decidió efectuar el cambio de AFP. Resaltó que no le hablaron de las características de la cuenta de ahorro individual.

Destacó que la motivación para retornar a Colpensiones es la cuantía de la mesada pensional.

Destáquese que el deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación completa por parte del asesor.

En todo caso, en gracia de discusión, lo cierto es que no se vislumbra una suficiente ilustración, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión

mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de afiliación mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por el accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Teniendo en cuenta que el presente asunto no analiza el traslado de régimen pensional, sino el acto de afiliación inicial al RAIS, habrá de replicarse que en la ya muy vasta jurisprudencia desarrollada sobre el tema los vocablos “retornar” o “regresar” no son propiamente los verbos rectores y si bien esa ha sido la orden que ha prevalecido en el grueso de los fallos, ello se debe a que precisamente se ha tratado de personas que se encontraban adscritas a ese régimen.

La grave deficiencia informativa que se sanciona con la ineficacia en los casos de traslado puede incluso considerarse más lesiva en los de una primera afiliación, pues allí un ciudadano inerte que nunca ha estado afiliado y desconoce los intrínquilos del asunto y las consecuencias que gravitan allí sobre su futuro debería gozar del mejor asesoramiento. La expresión “retrotraer las cosas a su estado anterior” no puede suponer quedar en un limbo jurídico donde carezca de afiliación y por ende de la

posibilidad de pensionarse, so pena de que también se le socave el derecho fundamental de igualdad frente a quienes sí venían afiliados.

Así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto, entendiéndose que el actor estuvo afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones sin solución de continuidad.

Ha de agregarse que ninguna variación genera la **MOVILIDAD** entre diferentes administradoras del RAIS que se presentó en el caso del señor SERRANO PINEDA, quien en 1997 se vinculó a Porvenir, y posteriormente efectuó movilidad a Protección conforme se aprecia en el reporte del SIAFP (fl. 34 del archivo 08 del expediente digital), siendo Protección S.A. el fondo donde actualmente permanece desde el último cambio efectuado el 12 de marzo de 1997. Lo anterior por cuanto, de un lado, importa es examinar lo acontecido al momento de cambiar de régimen, y de otro lado, cuando hay movilidad entre fondos privados, la asesoría NO suele referirse a las características del sistema de prima media, mucho menos a las implicaciones del cambio de sistema pensional, dado que son otras circunstancias las que se resaltan; no es lo mismo promover el cambio de una administradora a otra, a promover un cambio de régimen pensional, pues en el primer caso, por regla general, sólo se publicita la rentabilidad de uno u otro fondo, lo que a voces del demandante, fue precisamente lo que sucedió, donde la solidez era un factor determinante para la vinculación a la AFP.

En todo caso, si las AFP incumplieron su deber de información y por consiguiente debe declararse la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, esa determinación implica privar de todo efecto práctico al traslado, por lo que mal haría esta Magistratura en siquiera pensar o asimilar una MOVILIDAD entre administradoras del RAIS, a una convalidación, por definirlo de alguna manera, de un acto jurídico que nunca existió.

Fue precisamente este el raciocinio de la Sala de Casación Laboral en sentencia de radicación SL4705-2021, cuando recalcó que:

En consonancia con lo antes señalado, debe resaltar la Corte que, desde la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, se ha sostenido que, una vez acreditada la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, **el acto jurídico no se torna en eficaz por los cambios que los afiliados hagan entre administradoras privadas** lo que ha sido reiterado entre otras en las providencias CSJ SL2877-2020, CSJ SL1942-2021 y CSJ SL1949-2021

El anterior criterio es el que se encuentra vigente en la jurisprudencia de la Sala; motivo por el cual se recoge cualquier otro que le sea contrario y, frente a la cual se advierte que, como la declaratoria de ineficacia del traslado tiene como sustento el incumplimiento del deber de información en el traslado inicial, **al estar afectado el acto jurídico primigenio, los negocios jurídicos subyacentes adolecen de igual afectación**, entre ellos los traslados que se efectúen a los diversos fondos privados, ello en tanto que, el efecto de la declaratoria de ineficacia es volver al statu quo, lo que implica retrotraer la situación al estado en que se

hallaría si el cambio de sistema pensional no hubiera existido jamás (CSJ 4025-2021, CSJ SL4062-2021, CSJ SL 4064-2021, entre muchas otras).

Luego entonces, para la Sala es claro que, en el presente asunto ni de la afiliación inicial, como tampoco de los traslados posteriores entre los diferentes fondos privados se evidencia que se hubiese recibido una información integral, completa y oportuna que brindara una ilustración respecto de las características, condiciones del mercado, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las contingencias financieras que tal decisión supondría en su derecho o como se dijo en la sentencia CSJ SL 6 oct.2021, rad.83576 « no prueba por sí mismo y mucho menos genera una especie de presunción relativa a que la voluntad reflexiva de la persona afiliada al materializar su acto de traslado de régimen pensional y de los posteriores tránsitos entre administradoras estaban nutridos con la debida ilustración en los términos explicados, ni así lo ha previsto el legislador».

Por lo tanto, la Sala insiste y reitera que **el solo hecho de que el afiliado se traslade en varias oportunidades dentro del RAIS, no puede convalidar, ni suplir el incumplimiento del deber de información por parte de la AFP al momento del traslado inicial** y los traslados posteriores, así como tampoco resulta ser evidencia de que el afiliado fue informado debidamente en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia y, menos aún puede considerarse que dicha circunstancia modera las consecuencias que ello supone en la eficacia del acto jurídico celebrado; todo esto bajo el contexto de que en el proceso quede por establecido que efectivamente el demandante no fue debidamente informado. (Resaltos de la Sala)

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, dígame aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a las administradoras del RAIS accionadas, a trasladar a Colpensiones E.I.C.E. todos los valores que hubieren recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se **MODIFICARÁ** la decisión adoptada por el a quo, pues no incluyó los costos de administración como 1 de los 3 conceptos que componen los gastos de administración, por lo que, en aras de cumplir lo preceptuado de forma pacífica y reiterada por nuestro órgano de cierre, se determinará que la AFP accionada deberá retornar los 3 ítems que componen los gastos de administración reseñados con antelación, al tenor de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, y así se dirá en la parte resolutive de la presente providencia.

Y es que cuando se presenta MOVILIDAD, es decir, la persona se traslada entre distintas administradoras del RAIS, se considera necesario señalar que tal obligación respecto de los valores a retornar NO debe recaer exclusivamente en cabeza de la última entidad afiliadora en que estuvo, como en este caso lo es Protección S.A., ni mucho menos se circunscribe al tiempo en que la persona estuvo

en ese último fondo, de ahí que el retorno de los gastos de administración se extienda respecto de la época en que permaneció en Porvenir S.A.

Y es que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del de la afiliación o traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(…) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...) Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que, no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES E.I.C.E. reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que el demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES E.I.C.E., máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Empero, ello NO quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

De otro lado, respecto a la indexación de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente **ADICIONAR** el fallo, toda vez que tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregado a Colpensiones E.I.C.E debidamente indexado por parte de Porvenir S.A. y Protección S.A., teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula: $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$. Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021.

También resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltense las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021¹, al momento de cumplirse la orden impartida, Porvenir S.A. y Protección S.A., deberán discriminar los conceptos entregados a Colpensiones E.I.C.E., detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados, punto en el que también se **ADICIONARÁ** el fallo proferido por el a quo.

En cuanto a la inconformidad del recurrente atinente a la imposibilidad de retornar las cuotas de administración en tanto a su juicio había operado el fenómeno jurídico de la PRESCRIPCIÓN, habrá de señalarse que ya la Corte se ocupó del tema cuando mediante sentencia de radicación SL2946-2021 emitida el 16 de junio, la M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, reitero que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales así como los derechos que de ella emanen son imprescriptibles, es decir pueden reclamarse en cualquier tiempo. Aunado a ello, en este tipo de procesos no se trata solo de revertir el acto de traslado, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras y administradoras.

En sentencia SL1942-2021 adujo que:

Por último, cumple acotar que no prospera la excepción de prescripción propuesta por las demandadas, como acertadamente lo dispuso el *a quo*, porque los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden solicitar que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales *en cualquier tiempo*, para que, por esa vía se reconozca a cuál de tales regímenes (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados.

En definitiva, la mentada declaratoria de ineficacia es imprescriptible, en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación, pues forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social.

Y luego en la SL2208-2021 señaló:

En cuanto a la excepción de prescripción que propusieron las demandadas, debe precisarse que esta Sala ha sostenido reiteradamente que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, ha afirmado que, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o

¹ Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en CSJ SL4360-2019).

En tal contexto, no sería dable acoger los razonamientos de Protección S.A., máxime cuando no podría desligarse la ineficacia de sus efectos, aduciendo que los derechos derivados de ella no prescriben (retornar a prima media), pero sus consecuencias sí (montos a devolver).

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema, **modificándola y adicionándola** en los aspectos antes aludidos.

Se condenará en costas en esta instancia a Protección S.A. y Porvenir S.A. a favor del demandante por no haber tenido éxito en la apelación. Se fijarán como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 para cada entidad. Dicha condena no se extiende a Colpensiones dado que fueron acogidos en esta instancia algunos de los argumentos planteados en el recurso de alzada.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 02 de marzo de 2022 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor **GUILLERMO ALBERTO SERRANO PINEDA** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.615.896 contra **PROTECCIÓN S.A., PORVENIR S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E..**

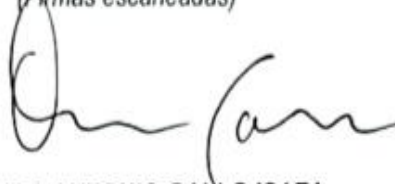
SEGUNDO: MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la providencia, bajo el entendido que PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., trasladarán a COLPENSIONES E.I.C.E., todos los valores que hubieren recibido con motivo de la afiliación del demandante, incluyendo también los tres ítems que componen los gastos de administración (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debidamente **INDEXADOS** al momento del pago, oportunidad en la que **además deberán discriminar** los conceptos entregados a COLPENSIONES E.I.C.E., detallando en forma pormenorizada a que

corresponden cada uno de los valores entregados, junto con el detalle de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, ultimó punto en que se **adiciona** la providencia.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A. y Protección S.A. Se fija como agencias en derecho la suma de \$1.160.000. para cada entidad y a favor del demandante.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante:	GUILLERMO ALBERTO SERRANO PINEDA
Demandado:	COLPENSIONES, PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A.
Radicado No.:	05001-31-05-014-2021-00216-01.
Tema:	INEFICACIA TRASLADO
Decisión:	CONFIRMA Y MODIFICA SENTENCIA
Fecha de la sentencia:	11/12/2023

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 12/12/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario